

ACUERDO: CG-IEEPCO-SNI-50/2013, RESPECTO DE LA ELECCIÓN DE CONCEJALES MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, QUE ELECTORALMENTE SE RIGE POR SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, respecto de la elección de concejales municipales del Ayuntamiento de San Juan Bautista Coixtlahuaca, que electoralmente se rige por Sistemas Normativos Internos, que se genera a partir de los siguientes:

ANTECEDENTES

A. ACTOS PREPARATORIOS DE LA ELECCIÓN

- 1. Acuerdo CG-IEEPCO-SNI-1/2012.** El 17 de noviembre de 2012 el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, aprobó el Catálogo General de los Municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos, entre ellos, al municipio que nos ocupa.
- 2. Solicitud de intervención.** El 25 de julio de 2013 el ciudadano Oscar Guzmán Cruz, Presidente Municipal de San Juan Bautista Coixtlahuaca, solicitó la intervención del instituto con el fin de que organice la elección municipal que se rige por sistemas normativos internos.
- 3. Acuerdo de intervención.** El 12 de agosto de 2013 en sesión de trabajo celebrada por las autoridades municipales y las autoridades auxiliares del municipio, se determinó que este órgano administrativo electoral coadyuvara en la realización del proceso electoral.
- 4. Primera convocatoria.** El 16 de agosto de 2013 el Ayuntamiento Municipal emitió la convocatoria para la elección de los concejales municipales.

5. Controversia contra la convocatoria. El 05 de septiembre de 2013 se levanto acta de comparecencia del ciudadano Sergio Cruz Ojeda y otros, en la que se manifestaron en contra de la convocatoria, esencialmente porque sostienen que en las últimas elecciones primero se instala el consejo municipal y es éste quien emite la convocatoria, entre otros puntos en disenso.

6. Controversia contra la convocatoria. El 13 de septiembre de 2013 se recibió escrito presentado por el ciudadano José Eloy Guzmán y otros, mediante el cual solicitan la cancelación de la convocatoria y que sea el instituto quien la emita.

7. Remisión del tribunal electoral local. El 17 de septiembre siguiente el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, por oficio TEEPJEO/SGA/3751/2013, remitió el escrito presentado por el ciudadano José Eloy Guzmán y otros, mediante el cual solicitan la cancelación de la convocatoria.

8. Proceso de mediación. El 19 de septiembre de 2013 se realizó una reunión conciliatoria entre las partes, logrando los acuerdos relativos a la revisión y adecuación de la convocatoria, preparación del proceso electoral; así como la integración e Instalación del Consejo Municipal Electoral, con la participación del Instituto en la designación del Presidente y Secretario.

9. Instalación del consejo. El 27 de septiembre de 2013 se instaló el Consejo Municipal Electoral, en los términos siguientes:

CARGO	CONSEJO MUNICIPAL
	NOMBRE
Presidente	Abel Ruiz Torres
Secretario	Joaquín Duarte Castillo

Del mismo modo, se integraron dos representantes de cada una de las planillas contendientes y el Presidente Municipal.

10. Adecuación a la convocatoria. El 30 de septiembre de 2013 el Consejo Municipal Electoral, aprobó diversas modificaciones a la convocatoria de fecha 16 de agosto de de 2013, así mismo, estableció la fecha de la elección para el día 20 de octubre de 2013.

11. Segunda convocatoria. El mismo 30 de septiembre el Consejo Municipal Electoral procedió a la publicación de la convocatoria para la elección de los concejales municipales, incluyendo en ella las adecuaciones consensadas por los grupos representativos y las autoridades municipales.

B. JORNADA ELECTORAL Y SUS RESULTADOS

1. Jornada. El día 20 de octubre 2013 se celebró la Jornada Electoral, para la renovación de las autoridades municipales.

2. Computo municipal. El mismo 20 de septiembre del 2013 el Consejo Municipal Electoral concluyó el computo de la elección, el cual arrojó los siguientes resultados:

CASILLA N°	UBICACION	PLANILLA VERDE	PLANILLA ROJA	VOTOS NULOS	VOTACION POR CASILLA
1	CORREDOR DEL PALACIO MUNICIPAL CENTRO	187	142	17	346
2	ESCUELA PRIMARIA "ATONALTZIN", CENTRO	163	104	7	274
3	CORREDOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "RIO POBLANO"	113	198	17	328
4	CORREDOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "SANTA CATARINA OCOTLAN"	13	69	1	83
5	CORREDOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE "LA ESTANCIA"	69	73	6	148
VOTACION TOTAL EMITIDA		545	586	48	1179

3. Concejales electos. Una vez concluido el computo municipal, resultaron electos los siguientes ciudadanos:

CARGO	CONCEJALES ELECTOS	
	TIPO	NOMBRE
Presidente Municipal	Propietario	Raúl López Carrizosa
	Suplente	José Adán Bazán García
Síndico Municipal	Propietario	Raúl López López
	Suplente	José Manuel Guzmán Hernández
Regidor de Hacienda	Propietario	Israel Everardo Mendoza López
	Suplente	Jacinto Ojeda Ojeda
Regidor de Educación	Propietario	Raymundo Salinas Bravo
	Suplente	Verónica Castellanos Maldonado
Regidor de Obras	Propietario	José Raúl Espinoza Bazán
	Suplente	Felipe Castellanos Lara
Regidor de Agencias y Barrios	Propietario	Reyes Ojeda Onofre
	Suplente	José Lucio Juárez Salinas

C. CONTROVERSIAS SOBRE EL RESULTADO DE A ELECCIÓN

1. Acta de comparecencia. El 21 de octubre de 2013 el ciudadano José Eloy guzmán y otros comparecieron ante la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, con la finalidad de manifestar su inconformidad respecto de los incidentes relativos al robo del paquete electoral, correspondiente a la casilla de Santa Catarina Ocotlán, así mismo, para solicitar que se presenten los originales o se declare la nulidad de la casilla.

2. Escrito de Inconformidad. El mismo día, los ciudadanos Wilfrido Cuevas y Onésimo Hernández y, en su calidad de representantes de la planilla verde, otros, presentaron escrito mediante el cual manifestaron su inconformidad por los hechos suscitados durante el traslado del paquete electoral correspondiente a la localidad de Santa Catarina Ocotlán.

Así mismo, solicitaron la nulidad de la casilla cuatro, de la comunidad de santa Catarina Ocotlan, por no existir acta original, que se declare la

validez y el reconocimiento del C. Ing. Horacio Miguel Cruz como presidente municipal, a partir del computo de las cuatro casillas restantes.

3. Nueva elección en asamblea. El 24 de octubre de 2013 integrantes del cabildo municipal, remitieron diversas documentales en las que medularmente se aprecia que se realizó otra elección el día 21 de octubre de 2013, de la cual resultaron electos el ciudadano Horacio Miguel Cruz, como Presidente Municipal, así como otros ciudadanos como concejales municipales.

4. Mediación. El 06 de noviembre de 2013 la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, celebró sesión de trabajo con la finalidad de encontrar la avenencia e las partes, sin embargo, no fue posible arribar a acuerdos de solución, dado que ambas partes mantuvieron posiciones inamovibles.

5. Escrito de inconformidad. El 21 de noviembre de 2013 el ciudadano Meliton Filiberto Cruz Zacarias y otros, presentaron escrito mediante el cual solicitan la validez de la elección en asamblea celebrada el día 21 de octubre de 2013.

6. Escrito del representante de planilla. El mismo día 21 de noviembre el ciudadano Oscar Lara Mateos, representante de la planilla verde, presentó escrito mediante el cual narra una serie de hechos en los que sostiene acontecieron durante el desarrollo de los trabajos de la mesa directiva de casilla instalada en el corredor de la Agencia Municipal de Santa Catarina, Ocotlán, Oaxaca.

7. Mediación. El 21 de noviembre de 2013 la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos, de nueva cuenta, celebró reunión conciliatoria entre las partes en controversia, ante la falta de consensos de solución alternativa, por acuerdo de las parte, se determino que el presente expediente se turnara al Consejo General para los efectos conducentes.

D. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE

1. Integración. Agotado el proceso de conciliación, el órgano responsable del desarrollo del proceso, integró el expediente y lo remitió a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos. Una vez recibido por ésta, se ordenó su estudio, así como la elaboración del proyecto de acuerdo correspondiente.

2. De la misma forma, en su oportunidad, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos formuló el presente proyecto y lo presentó al Consejo General para los efectos conducentes, en los términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción XI, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción XLIV, y 14, fracción VII, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, en relación con lo previsto por el artículo 114, apartado B, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca corresponde pronunciarse sobre la validez de las elecciones del Régimen de Sistemas Normativos y, en su caso, otorgar las constancias respectivas.

Lo anterior, en atención a que se trata de un municipio que elige a sus autoridades municipales en el marco lo previsto por los artículos 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, vinculados con los tratados internacionales en materia de derechos y cultura indígena suscritos por el Estado mexicano.

SEGUNDO. CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN

A efecto de realizar la calificación de la elección de concejales municipales, debe tenerse presente el marco constitucional y legal conforme al cual han de verificarse los requisitos de tal elección:

A. MARCO NORMATIVO

En el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece, que: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del mismo y se instituye para su beneficio, y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. De lo anterior deriva, que al decidir cualquier cuestión concerniente a la integración de los poderes públicos, debe privilegiarse la voluntad del pueblo.

En el párrafo segundo del artículo 41 constitucional se establece, que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, de acuerdo con las bases que se indican en la propia Constitución.

En resumen, los principios constitucionales que deben observarse en comicios democráticos para la renovación de, entre otras, las autoridades municipales son: elecciones libres, auténticas y periódicas; sufragio universal, libre, secreto y directo; campañas electorales en las cuales prevalezca el principio de equidad; organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

En cuanto al tema de derechos humanos, el artículo 1º constitucional dispone que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece.

En adición, la Constitución impone que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

En lo conducente a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el artículo 2° apartado A, fracción VII, establece que la Nación Mexicana es única e indivisible. La cual tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

En este orden de ideas, la Constitución define que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Además, que la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Se subraya, que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.

Dentro de esta relación, la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

- Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

- Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.
- Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.
- Entre otras.

Bajo estas premisas, se determina que las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en las legislaciones de las entidades federativas, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

En congruencia con lo antes expuesto, los artículos 25, 27, 29, 31 y 67, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, fundamentalmente, se encargan de desarrollar para el ámbito local, las disposiciones necesarias para configurar un gobierno republicano, representativo y popular, el cual, según expresa el numeral 29, tiene como base de su organización política y administrativa, el municipio libre.

El artículo 16 de la Constitución local, proclama la composición étnica plural del Estado de Oaxaca, sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades que lo integran, mencionando expresamente los Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Nahuas, Triquis, Zapotecos y Zoques.

En esencia, la Constitución Local reconoce a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a la libre determinación expresada como autonomía, gozando incluso de personalidad jurídica de derecho público; así como

derechos sociales, tales como: sus formas de organización social, política y de gobierno, sus sistemas normativos internos, jurisdicción sobre sus territorios, acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, participación en el quehacer educativo y en los planes de desarrollo, formas de expresión religiosa y artística, acervo cultural y, en general, los mecanismos de protección para todos los elementos que configuran su identidad.

Para asegurar tales prerrogativas, impone al legislativo local establecer en la ley reglamentaria las normas, medidas y procedimientos que aseguren la protección y respeto de dichos derechos sociales, con el objeto de que sean ejercidas directamente por las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas o por quienes legalmente los representen, entre otras, las formas de organización social, política y de gobierno, y los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas.

Por su parte, los artículos 114, primer párrafo, apartado B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1º, párrafo 1, Fracciones II y III, 4, numeral 1 y 2, 14, párrafo 1, fracciones I, II y VII, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, instituyen que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, es un órgano autónomo del Estado, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones que cuenta con atribuciones, entre otras, coadyuvar en la preparación y desarrollo de las elecciones del régimen de Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, así como resolver las controversias que se presenten, emitir la declaratoria de validez y, en su caso, el otorgar las constancias respectivas.

A su vez, el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales es el cuerpo legal encargado de regular, entre otras cuestiones, lo relativo a los derechos y obligaciones político-electorales de la ciudadanía y la función estatal de organizar y vigilar las elecciones de los integrantes de los ayuntamientos.

En el Libro Sexto, el Código regula la renovación periódica de las autoridades municipales, que electoralmente se realizan mediante Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas.

En su artículo 255, establece las bases conceptuales de este tipo de procesos electorales, aplicables en todos los municipios con Sistemas Normativos Internos, en los siguientes términos:

"Artículo 255

1. Las disposiciones de este libro serán aplicables en todos aquellos municipios, que en el ejercicio de su derecho a libre determinación expresada en su autonomía, electoralmente se rigen por sus propios sistemas normativos internos.

2. Se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas del Estado de Oaxaca a la libre determinación expresada en la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización política, así como para elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres, en un marco que respete la Constitución Federal, la Constitución Estatal y la Soberanía del Estado.

3. Las disposiciones contenidas en el presente Libro, son reglamentarias de los artículos 16 y 25, fracción II, del apartado A, de la Constitución Estatal, y tienen como objeto respetar, vigilar y sancionar los procedimientos electorales de los municipios y comunidades indígenas.

4. En este Código se entiende por sistemas normativos internos, los principios generales, las normas orales o escritas, instituciones y procedimientos que los municipios y comunidades indígenas reconocen como válidas y vigentes, y aplican en el desarrollo de su autogobierno, en particular en la definición de sus cargos y servicios, la elección y nombramiento de las autoridades comunitarias del gobierno municipal, la resolución de sus conflictos internos cuya determinación no sea competencia del Congreso; la participación en los asuntos que son susceptibles de afectarles y la protección de sus

principios, valores y culturas políticas propias en el ámbito municipal, como expresión del derecho de la libre determinación y autonomía reconocidos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y la Constitución Estatal.

*5. El procedimiento electoral en el régimen de sistemas normativos internos, comprende el conjunto de actos realizados por los ciudadanos y las autoridades competentes de los municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos, para la renovación y prestación de cargos y servicios municipales. **Estos actos comprenden desde la preparación de las asambleas electivas, el desarrollo de las mismas y el levantamiento de las actas correspondientes.***

6. El Instituto será garante de los derechos tutelados por los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal, y 16 y 25, fracción II, del apartado A, de la Constitución Estatal, para salvaguardar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas expresada en sus sistemas normativos internos y la autonomía para elegir a sus autoridades o gobiernos locales; así como en el reconocimiento a la diversidad de culturas y sistemas normativos existentes en el Estado.

7. Las normas, procedimientos y prácticas tradicionales, garantizarán que las mujeres disfruten y ejerzan su derecho a votar y ser votadas, en condiciones de igualdad frente a los hombres; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electas o designadas."

A partir de ello, en congruencia con los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, en su artículo 257, párrafo 1, fracciones I, II, y III, se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos indígenas, entre otras, el de actuar de conformidad con las disposiciones que rijan la vida interna de sus municipios, el de participar en la permanente renovación y actualización de sus sistemas, así como cumplir con los cargos, servicios y contribuciones que la Asamblea les confiera.

Por lo que respecta a los requisitos de elegibilidad, los ciudadanos deben contar con las cualidades indicadas por el artículo 258 del Código, para estar en aptitud de resultar electos.

En cuanto a los actos previos a la elección a los que deben ajustarse los pueblos y comunidades indígenas para elegir a sus autoridades municipales, se establecen en los artículos 259 y 260 del Código.

En este orden de factores, en el artículo 261 del Código se disponen las reglas relativas a los actos correspondientes a la jornada electoral.

Se distingue en la norma, una prohibición expresa de intervención en dichos comicios dirigida hacia los partidos políticos, en su artículo 262.

En razón de lo anterior, previamente debe desplegarse una revisión respecto del cumplimiento de los requisitos que nos indica el artículo 263, de la normatividad multicitada.

Desde luego, que la satisfacción de los elementos fundamentales señalados con anterioridad permite considerar a una elección como producto del ejercicio popular de la soberanía, realizada dentro del sistema jurídico-político construido en las constituciones federal y local, así como de los Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas y las demás disposiciones particulares de la elección.

Bajo esas premisas, puede decirse que este Consejo General estaría en condiciones de emitir la declaración de validez de la elección y, en su caso, expedir las constancias respectivas.

B. CONTROVERSIAS

1. Mediación como sistema alternativo para la solución de conflictos

El artículo 266, párrafo 1, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, concibe la mediación electoral como un medio alternativo para solucionar los conflictos, a través del cual las partes resuelven directamente una controversia con la intervención o colaboración del instituto.

Conforme la disposición jurídica anotada, debe decirse que esta alternativa de resolución de los conflictos electorales, está basada en los criterios de la democracia, la pacificación social, la tolerancia, el **diálogo**, el respeto y el **consenso**.

Ahora bien, de forma categórica el artículo 266, párrafo 1, del mismo ordenamiento nos indica que la mediación tiene por objeto *“construir acuerdos justos, aceptables y pacíficos”*.

En el caso que nos ocupa, debe diferenciarse cuando la conciliación se encuentra establecida como etapa del proceso judicial o anterior al mismo; de aquellos sistemas, como el nuestro, que la reglamentan como una mera facultad del órgano administrativo electoral.

Esas diferencias surgen cuando la conciliación se impone como etapa previa a la introducción al proceso judicial, cuya naturaleza preventiva tiende a convertirse en un proceso autónomo cuando logra alcanzar el objetivo de avenencia.

En cuyo caso, la conciliación sería obtenida desde la especialidad de su objeto, es decir, que no interesa el objeto material que discute la litis sino el acuerdo logrado desde el acto de avenencia. Es así, que cualquier forma convenida entre las partes responde a decisiones propias de quienes las asumen.

De este modo sería posible confirmar que existe un proceso de conciliación independiente porque tiene partes, tiene un órgano que intermedia y pacifica (verbi gratia juez de paz) y consigue un resultado útil y efectivo al interés de los comparecientes.

Esta condición demuestra que cuando se habla de conciliación no se piensa en el sentido estricto del término, sino en un sentido más amplio que tolera la declinación de los intereses, el sometimiento absoluto y la misma transacción o renuncia recíproca a posiciones procedentes irreductibles.

No obstante, debe traerse a colación que el artículo 264 del Código establece dos hipótesis para instaurar un proceso de mediación, a saber:

a) La primera de ellas, en los casos de controversias que surjan respecto de la renovación e integración de los órganos de gobierno, en cuyo caso, según lo dispuesto por párrafo 2 de la norma antes invocada.

Ahora bien, si tomamos en cuenta el principio Constitucional de la definitividad de las etapas, en la hipótesis analizada quedarían fuera las controversias que se plantean con respecto de las reglas aprobadas, es decir, aquellas precisamente con las que se desarrolló los comicios.

Se sostiene lo anterior, a partir de que se destacan en la norma los vocablos “*renovación e integración*” de los órganos de gobierno, cuestión que se materializa precisamente con la realización de los comicios -jornada electoral- y la calificación de la elección.

En ese sentido, en los casos de controversias que surjan desde la realización de los comicios y hasta antes de emitir el acuerdo de calificación de la elección, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos podría solicitar la opinión de instituciones públicas calificadas para emitir criterios respecto de los Sistemas Normativos Internos, según lo indica el párrafo primero del artículo 265.

Ahora bien, previamente a cualquier resolución se establece el imperativo de buscar la conciliación entre las partes, lo que entonces, nos conduce a la instauración de un proceso de mediación con el objeto de construir acuerdos justos, aceptables y pacíficos; y con base en ellos, tomar por consenso entre las partes alguna de las variables de solución previstas en los párrafos del dispositivo 265 del Código invocado.

Sin embargo, es evidente que las variables de solución se encuentran inmersas en el proceso alternativo de resolución de conflictos, pues tales disposiciones corresponden al “CAPÍTULO QUINTO” denominado “De la Mediación y de los Procedimientos para la Resolución de Conflictos

Electorales”; en consecuencia, solo pueden ser determinadas con la avenencia de las partes en conflicto.

En la hipótesis analizada, debe decirse que cuando se trata de irregularidades planteadas contra el resultado de la elección, así como la pretensión de nulidad de los comicios, este órgano administrativo electoral no cuenta con atribuciones para analizar dichas irregularidades, como se demostrará más adelante.

b) La segunda hipótesis, se refiere a cuando se manifieste alguna inconformidad con las reglas del sistema normativo interno, en base a lo previsto por el párrafo 3, del dispositivo legal mencionado.

Es decir, la legislación obliga a este órgano a proveer lo necesario y razonable para que las comunidades indígenas elijan a los ayuntamientos conforme sus Sistemas Normativos Internos, propiciando, la conciliación, por los medios a su alcance, como es la consulta con los ciudadanos que residen en el municipio.

Así las cosas, el órgano administrativo electoral debe procurar las condiciones que permitan llevar a cabo la celebración de los comicios, esto es con el objeto de conciliar las diversas posiciones respecto a las reglas del proceso electoral. Cuestión que debe entenderse como previa a la celebración de la jornada electoral.

Al respecto, existe un criterio regulador en la Jurisprudencia 15/2008, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señalan:

Joel Cruz Chávez y otros

VS

*Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca
y otras*

Jurisprudencia 15/2008

COMUNIDADES INDÍGENAS. LA AUTORIDAD ELECTORAL DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ELECCIONES POR USOS Y COSTUMBRES (LEGISLACIÓN DE OAXACA).- De los artículos 2, apartado A, fracciones III y VII y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 58 y 125 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, se desprende que las autoridades electorales están obligadas a proveer lo necesario y razonable para que las comunidades indígenas elijan a los ayuntamientos conforme al sistema de usos y costumbres, propiciando, la conciliación, por los medios a su alcance, como es la consulta con los ciudadanos que residen en el municipio. La autoridad electoral, en ejercicio de sus atribuciones, debe procurar las condiciones que permitan llevar a cabo la celebración de los comicios.

4ta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-11/2007.—Actores: Joel Cruz Chávez y otros.—Autoridades responsables: Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras.—6 de junio de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Marco Antonio Zavala Arredondo y Adin de León Gálvez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2542/2007.—Actores: Moisés Ramírez Santiago y otros.—Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2568/2007.—Actores: Javier Felipe Ortiz García y otros.—Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.

Notas: El contenido de los artículos 58 y 125 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, el cual se interpreta en esta jurisprudencia actualmente corresponde con los diversos 79 y 143 respectivamente, del código vigente.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de octubre de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 16 y 17.

2. Estudio de la controversia

Las peticiones planteadas por los integrantes del cabildo y diversos ciudadanos de San Juan Bautista Coixtlahuaca resultan inatendibles, por los motivos y razones que a continuación se indican:

a) Precisión de la controversia:

La causa de pedir de los inconformes, se circunscribe esencialmente a solicitar que se declare la nulidad de la votación recibida en una casilla, y en consecuencia se valide el triunfo de la planilla verde, con el cómputo de las cuatro casillas restantes.

Por otra parte, se solicita la validación de la elección celebrada mediante asamblea de fecha 21 de octubre de 2013, lo que conllevaría implícitamente, la nulidad de la elección celebrada el día 20 de octubre del mismo año.

b) Atribuciones del Instituto:

En cuanto a las atribuciones del instituto para la resolución de las controversias en este tipo de procesos, el artículo 264, párrafos 1 y 2 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, el Consejo General debe conocer las controversias respecto de la renovación e integración de las autoridades que se eligen mediante los sistemas normativos internos de los pueblos y las comunidades indígenas.

Este precepto otorga atribuciones al Consejo General para atender las controversias que se presenten mediante la implementación de un proceso de mediación electoral en el que se busque la conciliación entre las partes, en los casos anteriormente abordados.

Sin embargo, resulta importante enfatizar, que en términos de lo previsto por el artículo 41, fracciones VI, VII, VIII y IX, la implementación de las tareas que se derivan de dicho método alternativo de solución, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos.

De la misma manera, no debe perderse de vista que lo previsto por el artículo 26, fracción XLIV, del Código establece atribuciones para emitir un acto declarativo, sobre la validez o no de un proceso electoral del tipo que nos ocupa, el cual se encuentra vinculado con el cumplimiento de los requisitos formales y constitucionales de una elección desarrollada en el marco de la auto determinación de los pueblos y comunidades indígenas.

c) Atribuciones del Tribunal:

Sin embargo, en la especie debe tomarse en cuenta lo previsto por artículo 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el cual dispone que la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado de Oaxaca es el Tribunal Estatal Electoral.

Entre las atribuciones que se le confieren al órgano jurisdiccional, se encuentran la de conocer los recursos y medios de impugnación respecto de la elecciones que se realizan mediante usos y costumbres, y las demás controversias que determine la ley respectiva; además de la declaración de nulidad de una elección, por las causas expresamente establecidas en la Ley:

"De los Tribunales Especializados

(Reformado mediante decreto No. 397, publicado el 15 de abril de 2011)

Artículo 111.- *El Poder Judicial contará con Tribunales Especializados, de carácter permanente, autónomos en su funcionamiento e independientes en sus decisiones, los cuales contarán con las siguientes características y atribuciones:*

I.- Sus resoluciones en el ámbito de su competencia serán definitivas e inatacables en el orden local;

II.- ..."

Los Tribunales a los que se refiere el primer párrafo de este artículo son los siguientes:

A. El Tribunal Estatal Electoral, es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado de Oaxaca, y tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Conocer de los recursos y medios de impugnación que se interpongan respecto de las elecciones de Gobernador del Estado, Diputados y Concejales de los Ayuntamientos por los regímenes de partidos políticos y de usos y costumbres, de la revocación de mandato del Gobernador del Estado, así como de todas las demás controversias que determine la ley respectiva;

II.- ...

III.- ...

IV.- El Tribunal Estatal Electoral podrá decretar la nulidad de una elección por causas expresamente establecidas en la ley. Se preverán los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias de impugnación, tomando en cuenta el principio de definitividad de los procesos electorales;

V. ...

VI. (sic) Las demás atribuciones que le confieran esta Constitución y la Ley.

En tanto que adicionalmente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, en su Libro Tercero denominado *"De los Medios de Impugnación y de las*

Nulidades en las Elecciones que se rigen por el Sistema de Derecho Consuetudinario”, entre otras, establece las siguientes:

Artículo 4

1. El sistema de medios de impugnación en materia electoral, se integra con el conjunto de medios o vías legalmente establecidas para cuestionar la legalidad o validez de un acto de autoridad y tendentes a que se modifiquen o revoquen los acuerdos y resoluciones dictadas por los organismos electorales en los términos de esta Ley.

2. El sistema de medios de impugnación regulado por esta Ley tiene por objeto garantizar:

a) Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, y

b) La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales.

3. El sistema de medios de impugnación se integra por:

a)...

b)...

e) Los que se establecen en esta Ley para garantizar la legalidad de las elecciones que se rigen bajo normas de derecho consuetudinario; y

f)...

Artículo 70

1. Los medios de impugnación regulados en este libro tienen por objeto garantizar:

a) Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente a las normas, procedimientos y prácticas tradicionales de los pueblos y las comunidades indígenas, al principio de legalidad; y

b) La definitividad de los distintos actos y etapas del procedimiento electoral consuetudinario.

"De la Procedencia

Artículo 84

*1. Durante el proceso electoral consuetudinario **exclusivamente en la etapa de resultados**, de declaración de validez y calificación de la elección procederá el recurso de inconformidad para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales que violen el sistema normativo del pueblo o comunidad indígena, normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de concejales a los ayuntamientos en los términos señalados en el presente Libro.*

Artículo 85

1. Son actos impugnables a través del recurso de inconformidad, en los términos del Código y la presente Ley, los siguientes:

*a) **Los resultados**, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las Constancias de Mayoría;*

*b) **La nulidad de la votación o la nulidad de la elección;**"*

"De la Competencia

Artículo 87

*1. El Tribunal es competente para conocer y resolver el **recurso de inconformidad**.*

Artículo 88

1. Las sentencias que recaigan a los recursos de inconformidad podrán tener los siguientes efectos:

a)...

*b) **Declarar la nulidad de la votación emitida para la elección de concejales a los ayuntamientos que se rigen bajo normas de derecho consuetudinario, en consecuencia, modificar o revocar el acta respectiva;**"*

“Reglas Generales

Artículo 91

*1. Las nulidades establecidas en este Título podrán afectar la votación emitida en la elección de concejales a los ayuntamientos y, en consecuencia, **los resultados del cómputo de la elección impugnada.***

“De las Nulidades de la Votación Recibida y de Elección

Artículo 93

*1. Preservando las normas, procedimientos y prácticas tradicionales de elección de las autoridades municipales de los pueblos y comunidades indígenas, **podrá declararse la nulidad de la votación recibida o la nulidad de una elección cuando haya quedado plenamente probado y sean determinantes para el resultado de la elección, irregularidades graves, no reparables en la elección que violen en forma alguna los principios de legalidad, libertad, certeza, imparcialidad y autenticidad en la emisión del voto.**”*

d) Conclusiones:

De estas atribuciones, se pueden distinguir dos ámbitos de actuación, a saber:

1) La del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, de orden administrativo-electoral para resolución de controversias mediante la implementación de la mediación y la avenencia de las partes, así como la calificación de las elecciones correspondientes al régimen de Sistemas normativos internos de los Pueblos y comunidades indígenas, y

2) La del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, de carácter puramente jurisdiccional.

La función jurisdiccional del Tribunal Electoral se desarrolla mediante la resolución, en forma definitiva, de los medios de impugnación de carácter

contencioso, previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, los cuales tienen como finalidad garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación.

Lo que constituye en esencia, el sistema integral de justicia en materia electoral dentro del cual se prevén los mecanismos para que los actos y resoluciones de los órganos electorales se ajusten al principio de legalidad.

Cuestión que se logra mediante la interposición de medios de impugnación previstos por la ley, la instauración de las fases y procedimientos del proceso judicial, así como la emisión de una sentencia. Elementos que materializan con la reparación del daño o afectación a la esfera jurídica de algún ciudadano integrante de los pueblos y comunidades indígenas.

En consonancia con lo anterior, en los artículos 74, párrafo 1, y 75, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral dispone, reglas concretas respecto al ofrecimiento, admisión y valoración de las pruebas para la resolución de los medios de impugnación previstos en su Libro Tercero.

Así como, en su caso, recabar de oficio y ordenar el desahogo de los medios de pruebas que estime necesarios para resolver las inconformidades que le sean planteadas.

En cambio, en el procedimiento alternativo para la resolución de conflictos que se impone desarrollar al Consejo General cuando existan controversias, no se rige por Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sino por las disposiciones previstas en los artículos 264, 265 y 266 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca.

Lo que impide que este órgano administrativo electoral admita las pruebas ofrecidas, ordene su desahogo y efectué las valoraciones correspondientes, en el marco de un proceso jurisdiccional conforme la normatividad antes apuntada, y cuya naturaleza misma del asunto cuestionado, resulta competencia exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

En efecto, toda actuación autoritaria, sin excepción, debe de encontrarse fundamentada en un precepto jurídico que directa e innegablemente la regule, pues si no existe este sustento legal, el proceder de la autoridad será contrario a derecho, toda vez que se estará en presencia de un órgano incompetente, lo que equivale a decir que el ente de autoridad de que se trate se encuentra desprovisto de la potestad de proceder en el sentido en que lo hace.

Adicionalmente a lo antes planteado, es conveniente aclarar que sólo podrá ejercer una carga competencial específica un órgano de autoridad que encuentre su existencia jurídica en un ordenamiento legal, es decir, las autoridades no existen *-per se-*, sino que se hace necesario que se encuentren reguladas por el orden jurídico que les resulte aplicable al caso concreto.

De estimar lo contrario, a juicio de este órgano administrativo se estaría ante la presencia de una violación a los principios legalidad y de seguridad jurídica, a que hacen referencia los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En adición a lo anterior, el artículo 255, párrafo 5, del Código de la materia prevé que el procedimiento electoral que nos ocupa, comprende el conjunto de actos realizados por los ciudadanos y las autoridades competentes de los municipios que se rigen por sus sistemas normativos internos, para la renovación y prestación de cargos y servicios municipales. Sobre esta situación dispone, que esos actos comprenden desde la

preparación de las asambleas electivas, el desarrollo de las mismas y hasta el levantamiento de las actas correspondientes.

En ese sentido, el proceso electoral concluyó con el levantamiento de las actas en las mesas directivas de casilla, la realización del cómputo municipal y la remisión del expediente, dentro del plazo previsto por el artículo 261, párrafo 3, del Código.

En consecuencia, al haber concluido el proceso de conciliación intentado por el órgano electoral, sin que se alcancen los acuerdos necesarios para la resolución alternativa de la controversia, con base en el principio Constitucional de la definitividad de las etapas, debe decirse, que en lo solicitado por el grupo encabezado por los integrantes del cabildo de San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca, y ciudadanos inconformes, subyacen diversos elementos sustantivos que se encuentran íntimamente vinculados a los medios de impugnación y a las hipótesis de nulidad previstas por los artículos 4, párrafos 1, 2, incisos a) y b), y 3, inciso e), 70, párrafo 1, incisos a) y b), 84, párrafo 1, 85, párrafo 1, incisos a) y b), 87, párrafo 1, 88, párrafo 1, inciso b), 91, párrafo 1, 93, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca.

En consecuencia, este órgano administrativo electoral debe concluir que no ha lugar a determinar las pretensiones solicitadas por el grupo inconforme con el resultado de la elección, en virtud de que carece de jurisdicción y competencia para acceder a lo solicitado; y por disposición del sistema jurídico antes descrito.

En adición a lo anterior, se advierte que de conformidad con según lo establecido por los criterios de jurisprudencia cuyo rubro y texto mencionaran a continuación, en el caso, se debe garantizar a los integrantes de los pueblos indígenas *“el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado”*:

Herminio Quiñónez Osorio y otro

VS

*LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca,
erigida en Colegio Electoral y otro*

Jurisprudencia 7/2013

PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JURISDICCIÓN ELECTORAL.- De la interpretación sistemática de los artículos 4, párrafo primero y 17, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se debe garantizar a los integrantes de los pueblos indígenas "el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado", que los tribunales deben estar expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, así como el que se garantice la independencia judicial y la plena ejecución de sus resoluciones, lo que obliga a tener un mayor cuidado en la aplicación de las causas de improcedencia que se prevén expresamente en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y las que derivan de la normatividad aplicable en la materia. En ese tenor, una intelección cabal del enunciado constitucional "efectivo acceso a la jurisdicción del Estado", debe entenderse como el derecho de los ciudadanos que conforman las respectivas comunidades indígenas a lo siguiente: a) La obtención de una sentencia de los órganos jurisdiccionales del Estado; b) La real resolución del problema planteado; c) La motivación y fundamentación de dicha decisión jurisdiccional y, d) La ejecución de la sentencia judicial. Esta última conclusión se apunta porque los integrantes de dichas comunidades deben tener un acceso real a la jurisdicción del Estado, no virtual, formal o teórica, por lo que se debe dispensar una justicia en la que se puedan defender sin que se interpongan impedimentos procesales por los que indebidamente se prescinda de sus particulares circunstancias, ya que la efectividad de la administración de justicia electoral debe traducirse en un actuar que sustraiga al ciudadano de esas comunidades de una resolución o sentencia alejada de formalismos exagerados e innecesarios, para que, en forma completa y real, el órgano jurisdiccional decida materialmente o en el fondo el problema planteado.

5ta Epoca:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-037/99.—Actores: Herminio Quiñónez Osorio y otro.—10 de febrero de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Juan Carlos Silva Adaya.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-9167/2011.—Actores: Rosalva Durán Campos y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán.—2 de noviembre de 2011.—Mayoría de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Fernando Ramírez Barrios.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1640/2012.—Actor: Andrés Nicolás Martínez.—Autoridades responsables: Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca y otras.—30 de mayo de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Héctor Rivera Estrada.

Notas: El contenido del primer párrafo del artículo 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se interpreta en la presente tesis, corresponde con el 2.º, Apartado A, fracción VIII, del ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de junio de dos mil trece, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, páginas 19, 20 y 21.

Joel Cruz Chávez y otros

VS

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras

Jurisprudencia 13/2008

COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES.-La interpretación sistemática y funcional de los artículos 2, apartado A, fracción VIII, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 2, 4, 9, 14 y 15 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2, 4, apartado 1 y 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y 1, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conduce a sostener que en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por integrantes de comunidades o pueblos indígenas, en el que se plantee el menoscabo de su autonomía política o de los derechos de sus integrantes para elegir sus autoridades o representantes, conforme a sus propias normas, procedimientos y prácticas tradicionales, la autoridad jurisdiccional electoral debe no sólo suplir la deficiencia de los motivos de agravio, sino también su ausencia total y precisar el acto que realmente les afecta, sin más limitaciones que las derivadas de los principios de congruencia y contradicción, inherentes a todo proceso jurisdiccional, porque tal suplencia es consecuente con los postulados constitucionales que reconocen los derechos de estos pueblos o comunidades y sus integrantes. Lo anterior, porque el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, prevista en el artículo 17 constitucional, tiene como presupuesto necesario la facilidad de acceso a los tribunales. Esto es así, porque el alcance de la suplencia de la queja obedece al espíritu garantista y antiformalista, tendente a superar las desventajas procesales en que se encuentran, por sus circunstancias culturales, económicas o sociales.

4ta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-11/2007.—Actores: Joel Cruz Chávez y otros.—Autoridades responsables: Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca y otras.—6 de junio de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Marco Antonio Zavala Arredondo y Adín de León Gálvez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2568/2007.—Actores: Javier Felipe Ortíz García y otros.—Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2569/2007.—Actores: Epifania Quiroga Palacios y otros.—Autoridades responsables: Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Genaro Escobar Ambríz.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de octubre de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 17 y 18.

Herminio Quiñónez Osorio y otro

VS

LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral y otra

Jurisprudencia 28/2011

COMUNIDADES INDÍGENAS. LAS NORMAS PROCESALES DEBEN INTERPRETARSE DE LA FORMA QUE LES RESULTE MÁS FAVORABLE.- *De la interpretación funcional del artículo 2º, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce y garantiza a las comunidades indígenas el derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado, se deriva el deber de establecer protecciones jurídicas especiales en favor de las comunidades indígenas y de los sujetos que las conforman, considerando sus particulares condiciones de desigualdad y facilitándoles el acceso efectivo a la tutela judicial, a fin de no colocarlos en un verdadero y franco estado de indefensión, al exigirles la satisfacción o cumplimiento de cargas procesales que sean irracionales o desproporcionadas, de*

acuerdo con su circunstancia de desventaja social y económica ampliamente reconocida en la Constitución y por el legislador en diversos ordenamientos legales. Por tanto, dado su carácter tutelar, debe considerarse que los medios de impugnación por los cuales se protegen los derechos político-electorales del ciudadano, se rigen por formalidades especiales para su adecuada protección, en razón de lo cual, las normas que imponen cargas procesales, deben interpretarse de la forma que resulte más favorable a las comunidades indígenas.

5ta Epoca:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-037/99.—Actores: Herminio Quiñónez Osorio y otro.—Autoridades responsables: LVII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, erigida en Colegio Electoral y otra.—10 de febrero de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Juan Carlos Silva Adaya.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2542/2007.—Actores: Moisés Ramírez Santiago y otros.—Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-2568/2007.—Actores: Javier Felipe Ortiz García y otros.—Autoridades responsables: Instituto Estatal Electoral de Oaxaca y otra.—28 de diciembre de 2007.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: José Luis Ceballos Daza.

Notas: En el primero de los precedentes se invocó el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente se encuentra en la fracción VIII, del apartado A, del artículo 2º, de la Constitución, según la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 14 de agosto de 2001. La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de noviembre de dos mil once, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 19 y 20.

Por lo tanto, un efectivo acceso a la justicia solo puede garantizarse mediante la instauración de un proceso judicial, en el que se cumplan escrupulosamente las formalidades esenciales del mismo.

Las cuestiones antes expuestas resultan relevantes, dado que en la especie se formulan irregularidades de la jornada electoral, que conllevan la pretensión de obtener la declaración de nulidad de una casilla por una parte, y por la otra de la elección que nos ocupa, por ello, debe decirse entonces, que este tipo de determinaciones son competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado.

Así las cosas, es de concluirse que no ha lugar a atender la pretensión de declarar la nulidades solicitadas. Misma suerte, ocurre con la pretensión de validar el resultado de la elección celebrada en asamblea, dado que existo una convocatoria previamente acordada, por las partes ahora en controversia, en la que se precisan las bases particulares de la elección, entre ellas, lo relativo a celebrarla el día 20 de octubre de 2013.

C. DE LOS REQUISITOS PARA EMITIR LA DECLARACION DE VALIDEZ

Sobre las bases antes precisadas, este Consejo General procede al análisis del desarrollo del proceso electoral, conforme con las etapas y actos que lo integran, incluso de aquellos que aunque formalmente no se efectuaron en él, tienen una vinculación directa con el mismo:

- I. El apego a las normas establecidas por la comunidad o los acuerdos previos.** En términos de lo indicado por el artículo 263, párrafo 1, fracción I, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, debe ponderarse primeramente que la elección se haya apegado a las normas establecidas por la comunidad y, en su caso, a los acuerdos previos.

Bajo esa premisa, del estudio integral del expediente no se advierte incumplimiento alguno a las reglas de la elección establecidas por la

comunidad, mismas que se materializaron en la convocatoria particular de la elección y demás documentales que obran en el expediente.

En ese tenor, debe decirse que las normas, procedimientos y prácticas que se llevan a cabo al interior de las comunidades indígenas para la elección de sus representantes, se estiman como disposiciones particulares de orden electoral para la propia comunidad, pues con ellas se materializa la libre autodeterminación de las comunidades indígenas, que consagran los artículos 2, de la carta magna y 16 de la Constitución Local, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.

- II. Que la autoridad electa haya obtenido la mayoría de votos.** Por su parte, el artículo 263, párrafo 1, fracción II, del Código citado, impone el imperativo al Consejo General de revisar que los concejales electos hayan obtenido la mayoría de votos.

En concordancia, debe decirse que ha quedado señalado en los antecedentes del presente instrumento el número de votos emitidos a favor de los candidatos contendientes, y a simple vista puede observarse que la autoridad electa obtuvo la mayoría de votos el día de la jornada electoral, cuestión que puede corroborarse con las documentales que contienen el computo de la elección que se encuentran agregadas al expediente.

- III. La debida integración del expediente.** Por último, el artículo 263, párrafo 1, fracción III, del Código, determina el deber al Consejo General de revisar la debida integración del expediente.

De acuerdo con las documentales que obran en el expediente, a juicio de este Consejo General se encuentra debidamente integrado en la elección que nos ocupa, dado que en él se encuentran, entre otros, la convocatoria de la elección, que materializa las reglas particulares de la

misma, las minutas levantadas con sus acuerdos alcanzados, y las respectivas actas en las que se asentaron los actos previos, la jornada electoral y los resultados de la elección.

IV. De los derechos fundamentales. De igual forma, este Consejo General no advierte de forma evidente la violación a algún derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas, como son el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias de los pueblos y comunidades indígenas; así como el derecho de auto determinación en la designación de sus autoridades comunitarias, entre otros.

De la misma manera, no se advierte la existencia de alguna determinación contraria o incompatible con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni violación alguna a los derechos humanos internacionalmente reconocidos, mismos que quedaron señalados con anterioridad.

Se sostiene lo anterior, no obstante las diversas controversias que se generaron respecto de los incidentes durante el traslado de la paquetería electoral, así como la segunda elección celebrada en asamblea.

Es así lo anterior, dado que en ambos casos se buscaron alternativas de solución sin alcanzar la avenencia de las partes, para encontrar alguna salida alternativa a las diferencias.

V. Requisitos de elegibilidad. Los ciudadanos electos satisfacen los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 113 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Oaxaca; y 258, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, así como los previstos en los Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas participantes.

Lo antes expuesto, permite a este Consejo General concluir que ha lugar a emitir la declaratoria de la validez de la elección que nos ocupa y ordenar la emisión de las constancias respectivas.

Ante tales circunstancias, con fundamento en las consideraciones precedentes, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se declara valida la elección de concejales municipales del Ayuntamiento de San Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca.

SEGUNDO. Expídase las constancias respectivas a los ciudadanos electos como concejales municipales, en los términos que a continuación se indican:

CARGO	CONCEJALES ELECTOS	
	TIPO	NOMBRE
Presidente Municipal	Propietario	Raúl López Carrizosa
	Suplente	José Adán Bazán García
Síndico Municipal	Propietario	Raúl López López
	Suplente	José Manuel Guzmán Hernández
Regidor de Hacienda	Propietario	Israel Everardo Mendoza López
	Suplente	Jacinto Ojeda Ojeda
Regidor de Educación	Propietario	Raymundo Salinas Bravo
	Suplente	Verónica Castellanos Maldonado
Regidor de Obras	Propietario	José Raúl Espinoza Bazán
	Suplente	Felipe Castellanos Lara
Regidor de Agencias y Barrios	Propietario	Reyes Ojeda Onofre
	Suplente	José Lucio Juárez Salinas

TERCERO. El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

CUARTO. Publíquese este acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en cumplimiento a lo indicado por los artículos 15 párrafo 2, y 34, fracción XII, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, para ese fin expídase por duplicado este acuerdo. Así mismo, hágase del conocimiento público en la página de internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

NOTIFÍQUESE este acuerdo, por oficio, al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, para los efectos legales pertinentes.

Así lo resolvieron por unanimidad votos de los miembros del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, siguientes: Licenciado Víctor Leonel Juan Martínez, Consejero Electoral; Maestro Juan Pablo Morales García, Consejero Electoral; Licenciada Alba Judith Jiménez Santiago, Consejera Electoral; Licenciada Norma Iris Santiago Hernández, Consejera Electoral, y Maestro Alberto Alonso Criollo, Consejero Presidente, en sesión especial celebrada en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el día siete de diciembre del dos mil trece, ante el Secretario General, quien da fe.

POR ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL

CONSEJERO PRESIDENTE

SECRETARIO

ALBERTO ALONSO CRIOLLO

FRANCISCO JAVIER OSORIO ROJAS